



República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín

Medellín, Dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Sentencia	No.021
Referencia	Consulta
Tipo de proceso	Ordinario Laboral Única instancia
Clase de decisión	Sentencia
Demandante	Rubén de Jesús Franco Gómez
Demandado	Colpensiones
Radicación	05001-41-05-001-2019-00645-01
Despacho de origen	Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín
Decisión	Confirma

ANTECEDENTES

Corresponde resolver el grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia No.209 proferida el 27 de octubre de 2021, en el proceso de la referencia.

ASUNTO A RESOLVER

El problema jurídico a resolver, está encausado a revisar la sentencia de instancia, para determinar si el demandante RUBÉN DE JESÚS FRANCO GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.334.176 tiene derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional por persona a cargo de que trata el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, por su cónyuge MARÍA ALBA ADIELA TABARES, con la respectiva indexación.

La presente sentencia se emite de manera escrita, en aplicación del art. 15 del Decreto 806 de 2020, vigente hasta el 4 de junio del año 2022.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín en audiencia celebrada el 27 de octubre de 2021, emitió sentencia de instancia por la cual absolvió a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- de las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción denominada Inexistencia de la Obligación de pagar los incrementos pensionales por persona a cargo.

Para sustentar la decisión, realizó un recuento jurisprudencial sobre la vigencia del beneficio contenido en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, para finalmente estudiar el caso bajo el criterio vertido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-140 del 28 de marzo de 2019, que por ser una decisión de un órgano de cierre y de unificación, la razón de la decisión se convierte en obligatoria y vinculante para los jueces de inferior jerarquía, decisión acogida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 84054 de 19 de mayo de 2021.

En ese orden, encontró probado que al demandante le fue reconocida pensión de invalidez de origen no profesional, mediante Resolución 1078 de 1999, con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y la Resolución No. 7472 del 27 de octubre de 2008, por medio de la cual se convirtió la pensión de invalidez en vejez, expresamente consagra que el actor era beneficiario del régimen de transición de que trata el art. 36 de la Ley 100 de 1993, lo que indica que nunca disfrutó de prestación reconocida en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 por ende, concluyó que no era procedente el incremento pretendido por no encontrarse vigentes y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar incrementos pensionales y no condenó en costas.

Por último, ordenó la remisión en consulta de la sentencia de única instancia por ser totalmente adversa a las pretensiones del demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2000, se corrió traslado a las partes por el término de 5 días, en la oportunidad legal, el apoderado del demandante se pronunció en los siguientes términos:

Que mediante Resolución N° 7472 de octubre de 2008, se le reconoció pensión de vejez al RUBEN DE JESUS FRANCO GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía N°:4.334.176 razón por la cual solicita que se acceda a las pretensiones de la demanda para ello citó la sentencia de casación proferida el 27 de Julio 27 de 2006, en el expediente 21.517, proceso Ordinario en el cual figura como demandante, Luis Hernando Herrera Silva y accionado el ISS, expresó: *"... Cuando a los beneficiarios de un régimen de transición se les reconoce que las normas propias para su caso son las contenidas en el régimen anterior, quiere decir ello que todos sus derechos pensionales se derivan de la regulación vigente antes de entrar en aplicación las nuevas disposiciones. El axioma es sencillo: Si a los beneficiarios de pensiones de vejez se les aplica un régimen anterior vigente, es todo su conjunto y no solamente, como se pretende una parte de la normatividad que venía rigiendo. Y esta premisa es válida para todos los trabajadores que se hallan cobijados por las disposiciones del acuerdo 049 de 1990 y de su decreto reglamentario.*

Argumentó que, en el presente caso, el actor es beneficiario, por "transición" de la Ley 100 de 1993 y sujeto del régimen contenido en el acuerdo ISS 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año en concordancia con las normas que lo complementan, por ende, solicita acoger todas y cada una de las pretensiones alojadas en el cuerpo de la demanda.

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, guardó silencio en el término de traslado.

Concluida la etapa de alegatos, procede el Juzgado a resolver el grado jurisdiccional de consulta en el asunto de conformidad con el artículo 69 del adjetivo procesal del trabajo.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero señalar que el Juzgado desatará el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, en tanto se ha proferido una decisión totalmente adversa a sus intereses siguiendo el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en sentencia C-424 de 2015.

Por otra parte, se recuerda que dicho grado jurisdiccional, estatuido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se surte cuando la sentencia de primer grado es totalmente desfavorable al trabajador, afiliado o beneficiario, como también, cuando la decisión es contraria a los intereses de un ente territorial o una entidad pública donde la Nación actúa como garante de las obligaciones que se pudieran endilgar a la parte encartada de la Litis. La consulta tiene por objeto proteger en forma inmediata los derechos irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales que son de orden público.

En ese orden, precisa el Juzgado que ningún reparo existe acerca de la validez formal del trámite y concurrencia de los presupuestos procesales de manera que no se advierte circunstancias que puedan configurar causal de nulidad o que impidan la emisión de una sentencia de fondo.

Para resolver los temas propuestos, el Juzgado inicialmente se pronunciará sobre los parámetros jurídicos que regulan los incrementos pensionales por persona a cargo y su vigencia, para finalmente a analizar la situación particular del demandante.

Vigencia Incrementos Pensionales.

Para la viabilidad del incremento pensional es necesario acudir a lo previsto art. 21 del Acuerdo 049 de 1990, que dispone que la pensión mensual de invalidez y la de vejez se incrementarán así: a) En el siete 7% sobre la pensión mínima por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de

18 años si son estudiantes o inválidos de cualquier edad, que dependan económicamente del beneficiario, y b) En el 14% sobre la pensión mínima para el cónyuge del beneficiario, siempre que éste no disfrute de una pensión de invalidez o vejez.

En definitiva, tendrán derecho al reconocimiento del incremento pensional aquellos pensionados a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, cuyo cónyuge o compañero permanente o hijo discapacitado dependa económicamente de él y no perciba ingreso o pensión propia, dejando claro desde ya, que los pensionados por un régimen diferente al previsto en el Acuerdo 049 de 1990 no podrán hacerse merecedores del incremento tal como se señaló en primera instancia.

Respecto de la vigencia de los incrementos pensionales por persona a cargo, la jurisprudencia de la especialidad laboral ha sido pacífica en enseñar que tal prerrogativa no fue retirada del universo jurídico por la expedición de la ley 100 de 1993, de manera que conservaba vigencia por aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la referida ley, para lo cual pueden consultarse las sentencias CSJ SL, 27 jul. 2005, rad. 21517, CSJ SL, 5 dic. 2007, rad. 29741, reiterada en CSJ SL, 10 ago. 2010, rad. 36345 y CSJ SL 1975 de 9 de mayo 2018, en las cuales se explica que el nuevo estatuto de seguridad social no derogó esa prestación ni expresa ni tácitamente, aunado a que el art. 31 de esa normatividad imprimió vigencia a los reglamentos del extinto ISS en aquellos temas no regulados por la ley 100 de 1993.

No obstante, mediante sentencia **SU-140 de 2019**, la Corte Constitucional determinó que los incrementos pensionales contenidos en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 fueron objeto de derogatoria orgánica con la expedición de la Ley 100 de 1993, salvo que se trate de derechos adquiridos con anterioridad a la expedición de ésta última, *“todo ello, sin perjuicio de que de todos modos tales incrementos resultarían incompatibles con el artículo 48 de la Carta Política luego de que éste fuera reformado por el Acto legislativo 01 de 2015”*.

La Corte Constitucional señaló en dicha providencia:

"6.6. No sobra señalar que dicho derecho de incremento pensional al 14% para quienes cumplieron con los requisitos para acceder al derecho de pensión antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se encuentra reservado para quienes, en el momento de cumplir con tales requisitos, tuvieren cónyuge o compañera o compañero a cargo y mientras continúen teniéndolo". Debiendo entenderse que igual condición aplica cuando se pretende el reconocimiento por tener a cargo a hijos discapacitados.

La nombrada sentencia de unificación constituye precedente constitucional, de obligatorio cumplimiento, tal como lo explicó la Corte Constitucional en la Sentencia **SU-30 de 2015**, al comparar las sentencias de unificación de la Corte Constitucional con los fallos de constitucionalidad, en el siguiente sentido: *"En este punto es importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) y de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política"*.

En tal orden de ideas, la Corte en sentencia SU-611 de 2017 reiteró que:

*"la supremacía del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma de normas – principio de supremacía constitucional. En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutive como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la controversia"*¹.

(...) Lo anterior –según esta Corte- conlleva a que si una autoridad judicial desconoce la jurisprudencia constitucional se produce "en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando, en definitiva, la Constitución tiene una fuerza

1 Sentencia T-360 de 2014

*constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica*².

CASO CONCRETO

Según las pruebas documentales aportadas al proceso, para lo que interesa a la pretensión de reconocimiento y pago de incrementos pensionales, en esta instancia se encuentran demostrados los siguientes presupuestos fácticos:

Que al demandante le fue reconocida pensión de invalidez mediante Resolución No.1078 de 1999, a partir del 1º de enero de 1999, con fundamento en el art. 36 de la Ley 100 de 1993 que mediante Resolución No. 7472 de 27 de octubre de 2008 el Instituto de Seguros Sociales, convirtió la pensión de invalidez en una pensión de vejez vitalicia en virtud del artículo 10 del Decreto 758 de 1990 (fls.7-8 – expediente administrativo).

Se acreditó que el actor solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de los incrementos por compañera permanente a cargo, solicitud que fue negada, mediante Resolución SUB 186248 de julio 13 de 2018 (fl.10-12).

El Juzgado advierte que fue acertada la decisión de instancia, en aplicación del precedente unificador de jurisprudencia Constitucional, habida cuenta que, en este caso, el demandante consolidó su derecho a la pensión de invalidez, a partir del día **25 de febrero de 1998**, es decir en fecha posterior al **1 de abril de 1994**, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, por ende, el demandante carece de derecho al incremento al 14% de su medada pensional, porque en la actualidad la norma que reguló los incrementos pensionales por personas a cargo, desapareció del ordenamiento jurídico, de acuerdo con el último criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, que constituye precedente constitucional de obligatorio cumplimiento y aplicación, que no puede ser desconocido, so pretexto de

2 Sentencia T-292 de 2006.

aplicar el principio de favorabilidad, habida cuenta que no es posible interpretar una norma que perdió vigencia en el ordenamiento jurídico.

En conclusión, el Juzgado confirmará la decisión consultada.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTICUATRO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia No.209 proferida en audiencia celebrada el 27 de octubre de 2021, por el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín.

SEGUNDO.- SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO.- RETORNAR el expediente al Juzgado de origen.

La presente sentencia se notifica a las partes por **EDICTO**, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41 del C.P.T. y S.S y Auto de la SL CSJ AL-25502021. que se publicará en el micrositio del Juzgado: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-024-laboral-de-medellin->


MÁBEL LÓPEZ LEÓN
Juez

Firmado Por:

Mabel Lopez Leon
Juez
Juzgado De Circuito
Laboral 024
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**11d9965ea1a56e115a83dd378cec2611ef925153ea523a4bde62f2a
7bf0e7781**

Documento generado en 02/02/2022 11:59:54 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la
siguiente URL:**

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICUATRO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

EDICTO

La Secretaria del Juzgado Veinticuatro (24) Laboral del Circuito de Medellín;

HACE SABER

Que se ha proferido Sentencia de Segunda Instancia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario Laboral de Única Instancia
Demandante	Rubén de Jesús Franco Gómez
Demandada	Colpensiones
Juzgado de Origen	Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín
Radicado	05001 41 05 001 2019 00645 01
Fecha Sentencia Segunda Instancia	2 de Febrero de 2022
Decisión	Confirma

El presente Edicto se fija en el micrositio de **EDICTOS** de este juzgado de la página web de la Rama Judicial del Poder Público de Colombia, por **Un (1) Día Hábil**, hoy **Tres (3) de Febrero de Dos Mil Veintidós (2022)**, a las **Ocho (8:00) Horas**, con fundamento en lo previsto en los artículos 40 y 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armonía con el Auto de la SL CSJ AL-2550-2021.

La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.



ALEXANDRA NAVAS SANABRIA

Secretaria

El presente edicto se desfija el 3 de Febrero de 2022, a las 17:00 horas